

PRESIDENCIA

Bogotá, D. C., 20 de Mayo de 2013

Doctor
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
Secretario General
Cámara de Representantes
Congreso de la República
Ciudad



Referencia: Respuesta a numeral 13 de cuestionario Proposición 134 de Abril 16 de 2013 - Comunicación SG2-1297-13.

En atención a su comunicación SG2-1297-13 dirigida al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Doctor Juan Camilo Restrepo Salazar, de la cual hemos recibido copia en esta entidad el día 16 de mayo de 2013 desde dicho Ministerio, solicitando responder el numeral 13 del cuestionario correspondiente a la proposición 134 de Abril 16 de 2013 adjunta, la cual indica:

- *De las distintas políticas de fomento, incentivo y productividad que el gobierno nacional establece para los sectores agropecuarios y forestal (CIF, DRE, antes AIS, exenciones tributarias, créditos subsidiados y similares), favor establecer mediante tablas que discrimine para cada uno de los años del periodo 2007-2013 (marzo): tipo de incentivo o política, fecha de entrega, monto en dinero o descripción del beneficio, representante legal de la compañía beneficiaria, para cada uno de las empresas (pertenecientes a cada uno de los grupos identificados de empresas) descritas a continuación mediante nombre e identificación (Nit – Cedula de Ciudadanía) de diferentes empresas de las cuales envían relación adjunta*

Al respecto de la petición, es necesario precisar que la información requerida se encuentra bajo reserva bancaria, para lo cual y a fin de dar contexto a nuestra respuesta, consideramos prudente citar algunos conceptos, con referencia a este tema:

La reserva debe ser entendida como "el deber de los establecimientos bancarios y demás entidades financieras de guardar reserva y discreción sobre los datos de su cliente, la que conozcan en desarrollo de su profesión u oficio, por cuanto para el cliente pueden derivarse inmensos perjuicios con la divulgación de ciertos aspectos que por razones comerciales y personales no deben ser de libre acceso al público"¹. Sobre tal figura la Superintendencia Bancaria (Hoy Superintendencia Financiera de Colombia) ha impartido

¹ Superintendencia Bancaria, concepto No. 1998034212-1 del 8 de septiembre de 1998.



las instrucciones contenidas en el numeral 4º del Capítulo Noveno, Título I de la Circular Externa 007 de 1996 (Circular Básica Jurídica).

Sobre el tema de la reserva bancaria y los aspectos que no cobija, la Corte Constitucional se pronunció en el siguiente sentido:

"...En el caso colombiano, si bien en el derecho positivo la figura como tal no está consagrada, si se reconoce en nuestra legislación el deber jurídico de reserva que se le impone a las instituciones financieras, respecto de la información que en razón de la relación comercial que establece con sus clientes de ellos recibe. Tanto es así que, de una parte de ella emerge para el cliente un derecho subjetivo cuyo cumplimiento puede exigir por vía de las acciones que consagra el ordenamiento jurídico para el efecto, y de otra, su incumplimiento por parte de la entidad financiera le corresponde sancionarlo a los órganos de control financiero estatales.

*El secreto bancario, lo define la doctrina, "...como el deber jurídico que tienen las instituciones de crédito y las organizaciones auxiliares y sus empleados, de no revelar los datos que lleguen directamente a su conocimiento, por razón o motivo de la actividad a la que están dedicados."*²

"(...) el respeto del derecho a la intimidad de los particulares requiere de la protección de los datos acerca de la vida privada u otra información personal que dichos ciudadanos confían a las entidades bancarias en virtud de las relaciones profesionales entabladas con estas últimas. Además, en virtud de la protección del secreto profesional, el deber de sigilo mencionado comprende la información no sólo de carácter personal y familiar, sino también económico que llegue al conocimiento de las entidades bancarias en ejercicio de su actividad y que guarde relación de conexidad con la práctica de sus labores profesionales.

*"Así mismo, no forman parte del conjunto de datos amparados por el derecho a la intimidad los que (i) hagan parte de la información general y no comprendan datos personalizados del cliente, (ii) puedan ser obtenidas en otras fuentes de información accesibles al público, (iii) no se refieran a la vida privada ni a las operaciones que el usuario realiza con el banco que indiquen su perfil de gustos y preferencias, o, (iv) cuya circulación haya sido autorizada por el particular o por la ley dentro del respeto a la Carta. Además, (v) la Corte ha dicho que, en ciertas condiciones, los bancos pueden informar a centrales de riesgo crediticio cuál ha sido el comportamiento de sus clientes en tanto deudores, siempre que dicha información sea verídica, completa y actualizada"*³.

De la lectura de la anterior jurisprudencia se colige, que la contratación bancaria implica un grado importante de reserva, en la medida en que los datos suministrados por los clientes no pueden ser dados a conocer a terceros, en virtud a la confianza que ha sido depositada en la Entidad Financiera.

De otro lado, es indispensable señalar que dicha reserva no es absoluta, toda vez que

² Corte Constitucional, C 397 de 1998, MP. Fabio Morón Díaz

³ Sentencia No. T-440 del 29 de mayo del 2003, Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa.



según lo establecido en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, esta puede ceder, respecto a la información que legalmente estén obligados a suministrar los Bancos, por orden judicial, en investigaciones de carácter penal, tributaria o en virtud a la inspección, vigilancia e intervención del estado, aportando claro está, los soportes necesarios para tal efecto.

De igual forma, la información objeto de reserva bancaria puede ser otorgada a terceros siempre y cuando, se cuente con una autorización clara y expresa otorgada por el titular de la información, en la cual se manifieste su consentimiento para suministrarla. En lo referente a dicha autorización, ha expresado la Superintendencia Financiera lo siguiente:

"...Sobre esta misma materia, vale la pena precisar que no obstante la información de los usuarios de las entidades financieras estar sujeta a reserva bancaria, como antes se expresó, dicha reserva puede ser levantada por el usuario en su calidad de propietario de los datos que allí reposan, para lo cual es requisito indispensable, tal como lo ha expresado la Corte Constitucional en diferentes providencias⁴, que exista consentimiento previo y escrito del titular del dato por cuanto corresponde a información que pertenecen a su ámbito personal.

Bajo el cumplimiento de dicho requisito, debe la entidad financiera suministrar la información a la persona o personas autorizadas por el titular. De no existir la autorización correspondiente, no es viable jurídicamente entregar dichos datos, pues en tal caso existiría violación a la reserva bancaria por parte de la entidad respectiva...⁵

En ese orden de ideas, es importante puntualizar que en aquellos eventos en los cuales los Establecimientos de Crédito, entreguen información confidencial a terceros no autorizados o sin la debida orden judicial, estará sujeto tanto a sanciones administrativas como penales. Así las cosas, el artículo 269F del Código Penal incluyó dentro del ordenamiento jurídico colombiano el tipo denominado "violación de datos personales", en los siguientes términos:

"El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes."

De otro lado, en lo relativo a las solicitudes de información realizadas por los miembros del Congreso de la República, es indispensable traer a colación lo expresado por el Consejo de Estado, por medio de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en pronunciamiento cuya fundamentación constitucional conserva plena vigencia:

"En cuanto se refiere a las comisiones del Senado y de la Cámara de

⁴ Superintendencia Financiera de Colombia, Concepto No. 2003032370-1. Agosto 14 de 2003.

⁵ Ley 1273 de enero de 2009.

**Banco Agrario de Colombia**MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Representantes y a los miembros del Congreso en particular, ni aquéllas ni estos tienen facultades para conocer informes, datos o papeles que de acuerdo con la ley están amparados por la reserva, como es el caso de la contabilidad y demás documentos privados de los comerciantes.

(...)

"De modo que, de acuerdo con las disposiciones constitucionales se entiende que por ministerio de la Constitución o de la Ley conservan ese carácter en relación con el Congreso y con cada una de sus Cámaras, lo mismo que con las comisiones y con los miembros de cada una de ellas. Y esto, en armonía con todo lo antes dicho, es apenas natural. No puede ser de otra manera sin que se viole el principio de la separación de poderes y sin que pierdan su vigencia las disposiciones y garantías constitucionales que varias veces se han mencionado a lo largo de este estudio" (concepto del 4 de febrero de 1976 citado en providencia de enero 21 de 1988 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Magistrado Ponente Dr. Darío Quiñones Pinilla, exp. No. 87-D-027).

Conforme a la anterior providencia y en virtud a su condición, en relación con el objeto que motiva el numeral trece (13) de la petición, se considera que no existen fundamentos legales que permitan al Banco el suministro de la información requerida por los Representantes Ivan Cepeda y Wilson Arias, y en tal medida, no nos es posible acceder a dicha solicitud.

Con lo anterior esperamos haber atendido su solicitud no sin antes manifestarle que cualquier aclaración a la presente, con gusto será atendida.

Cordial saludo,

FRANCISCO ESTUPIÑAN HEREDIA
Presidente

